



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: NELSON ALBEIRO VILLA OCAMPO
Demandados: ACP COLPENSIONES, Y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 020 2022 00487 01
Sentencia: S-300

AUTO

En atención al poder especial para representar a la AFP COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS otorgado a la sociedad GOMEZ MEZA & ASOCIADOS S.A.S., se le reconoce personería como representante legal de la firma al Dr. JUAN FELIPE CRISTOBAL GÓMEZ ANGARITA. De igual forma, se accede a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor del Dra. MONICA ALEJANDRA RODRÍGUEZ RUBIO, portadora de la T.P. N° 393.539 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal, a excepción de la facultad de sustituir.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación** interpuesto por la **AFP COLFONDOS S.A.**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** concedido a favor

de **COLPENSIONES** en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de julio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

NELSON ALBEIRO VILLA OCAMPO demandó a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación y/o traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual, por lo que se debe entender sin solución de continuidad la afiliación al Régimen de Prima Media.

En consecuencia, solicita se condene a COLFONDOS S.A. a la devolución de todos los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual y rendimientos, para convertirlos en semanas cotizadas; así mismo, pide que si en el trascurso del proceso se cumplen los requisitos para la pensión de vejez se ordene a COLPENSIONES a su reconocimiento y pago de manera retroactiva e indexada.

HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 17 de diciembre de 1965; que el 1º de octubre de 1986 inició su vida laboral en la empresa DISEÑO MODERNOS Ltda., afiliándose al RPM y efectuando aportes hasta mayo de 1996, completando 346,86 semanas. Que el 19 de julio de 1996 se trasladó al RAIS administrado por COLFONDOS S.A., cotizando en este fondo 1.315,15 semanas y en toda su vida laboral un total de 1.662; que en mayo de 2022 solicitó proyección pensional a COLFONDOS S.A. y el reporte de la asesoría brindada para el traslado; que le es más favorable el RPM por la

diferencia de mesadas entre ambos regímenes; que se le violentaron los principios que rigen en favor del usuario-consumidor en el RAIS, incumpliendo la AFP con su deber de información; que el perjuicio causado se evidenció con la proyección pensional y que decidió solicitar ante Colpensiones el traslado, solicitud que fue negada por la entidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES manifestó que acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS y el número de semanas allí cotizadas; también es cierto el número de semanas cotizadas tanto en el RAIS como el total de toda su vida laboral; que es cierta la solicitud a COLFONDOS, como la elevada a COLPENSIONES para el traslado de régimen, la cual fue negada; y que no le constan los demás hechos, ya que corresponden a situaciones ajenas a Colpensiones. Se opuso a las pretensiones. Como excepciones propuso las que denominó aspectos legales y financieros que impiden el retorno del demandante al RPM, inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez, buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

COLFONDOS S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a COLFONDOS en 1996; que se atiene al contenido literal e íntegro del documento expedido por esta entidad acerca de la solicitud elevada por el actor; que no es cierto que no se le haya brindado información suficiente, pues se cumplió con la obligación legal de ilustrar de las consecuencias derivadas de su traslado; y que no le constan los demás hechos por tratarse de circunstancias del demandante con terceros ajenas a esta entidad. Se opuso a las pretensiones y excepcionó inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación del actor a Colfondos, prescripción, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 10 de julio de 2023, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, en consecuencia ordenó el regreso sin solución de continuidad al RPM actualmente a cargo de COLPENSIONES; 2) **CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES el 100% de los aportes del demandante y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos rendimientos, bonos pensionales asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, pólizas previsionales, lo descontado al fondo de garantía de pensión mínima desde la fecha efectiva de la afiliación al RAIS, esto es, desde el 1º de septiembre de 1996, hasta la fecha que se haga efectivo el traslado de régimen; 3) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir los aportes de la administradora de fondo privado, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS por el actor como semanas cotizadas en el RPM, que deberán reflejarse en la historia laboral; 4) **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES del reconocimiento de la pensión de vejez; 5) **DECLARÓ** prósperas las excepciones de Colpensiones de imposibilidad de condena en costas e inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez y 6) **CONDENÓ** en costas a la COLFONDOS S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Interpuesto por la apoderada de COLFONDOS S.A., solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se absuelva a esta entidad de todas las condenas impuestas, toda vez que al demandante se le brindó una asesoría integral, con las implicaciones del traslado de régimen, las características del RAIS, el funcionamiento del mismo, la diferencia entre los dos regímenes pensionales, la rentabilidad que producen los aportes en este régimen y su derecho de retracto. Asimismo, solicitó se absuelva de la condena impuesta a la devolución de seguros previsionales, fondo de garantía de pensión mínima y gastos

de administración, pues en lo que se refiere a los seguros previsionales al declarar la ineficacia se estaría dejando sin efectos el contrato entre la aseguradora y la administradora, correspondiéndole a la aseguradora devolver dichas sumas; respecto a los gastos de administración es la ley la que autoriza el descuento de este porcentaje, por lo que regresarlos se constituiría en un enriquecimiento sin justa causa a favor de Colpensiones. También solicita se absuelva de la condena en costas, toda vez que Colfondos siempre ha actuado de buena fe.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término legalmente concedido, COLFONDOS S.A. en sus alegatos manifestó que no se probó lo previsto en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez; que la Corte Suprema de Justicia realiza una mixtura para poder resolver las ineficacias de los traslados de régimen pensional, por cuanto acude a normas propias del sistema general de pensiones del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, para decir que el acto jurídico de traslado es ineficaz; que este fondo privado siempre la garantizó el derecho de retracto a la parte actora, así como el derecho a la libre escogencia; que este fondo sí cumplió con la carga procesal de haberle entregado información completa, veraz, cierta y oportuna al demandante; que no es viable jurídicamente imponerle a las administradoras, cargas probatorias distintas a las previstas en las leyes existentes para el momento de la ocurrencia de los hechos; que se debió realizar un análisis crítico y en conjunto de toda las pruebas; y que no se puede ordenar restituir los rendimientos financieros por la gestión que adelantó en la administración de los aportes en el RAIS, como tampoco las cuotas de administración, las primas de seguros y

mucho menos la indexación de las condenas, ya que esto sería imponer una doble sanción al fondo privado.

Si bien, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión, no podrán ser tenidos en cuenta debido a que la apoderada de dicha entidad no allegó el poder para representarla y actuar en esta instancia.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007

A esta altura del proceso está acreditado que: *i)* NELSON ALBEIRO VILLA OCAMPO nació el 17 de diciembre de 1965; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones desde el 1º de octubre de 1986¹, acumulando un total de 357,00 semanas; *iii)* que el 19 de julio de 1996 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A.², entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

¹ Folios 162 a 165 de la contestación de Colpensiones

² Folio 42 de la contestación de Colpensiones.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en*

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los fondos privados brindaron, en los momentos del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron con su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de

información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen, dijo que se encontraba laborando en METROPARQUES como Coordinador de Deportes, cuando reunieron a toda la parte administrativa cuando un asesor del fondo privado les manifestó que en el RAIS era mucho mas rentable por el momento en que se encontraban, que tendrían más ventajas, pero nunca le manifestaron las desventajas del traslado, ni las implicaciones del mismo, como tampoco de sus consecuencias.

De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo visto permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLFONDOS S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP

correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Se advierte, además, que la orden a COLFONDOS S.A. de trasladar los conceptos referidos en la sentencia de primera instancia anteriormente mencionados, deben incluir la respectiva indexación, según lo ha

indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."* Por tal razón, la sentencia de primera instancia será **ADICIONADA** en este aspecto.

En lo que toca con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se hubiere pagado a favor del actor, la decisión en este punto resulta imprecisa, ya que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será **PRECISADA**.

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas al fondo privado, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Condena en Costas

Finalmente, otro tema que cuestiona el apoderado de COLFONDOS S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso COLFONDOS presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA, ADICIONADA y PRECISADA.**

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de COLFONDOS S.A. S.A. y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, 10 de julio de 2023, pero la **ADICIONA** en el sentido de que la orden a la AFP COLFONDOS S.A. de devolución de las cuotas de administración, aportes para la garantía de pensión mínima y los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, debe incluir la respectiva INDEXACIÓN, y además, **ORDENAR** a COLFONDOS S.A. que, al momento de cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Y se **PRECISA** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor del demandante, la devolución del importe de este debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eec2e0e185166a0e26ab9ff09e61ca4cba38d8448627d6bf994acfe7bad18702**

Documento generado en 27/10/2023 03:11:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>